

ASISTENCIA A MUNICIPIOS INFORMA

Visite nuestra web: <http://www.dipgra.es/contenidos/AsistenciaJuridicayEconomica/>

Estimado/a Sr./a:

Durante al vigencia del estado de alarma, u otros estados excepcionales que pudieran declararse, desde el Servicio de Asistencia a Municipios mantendremos informados a los ayuntamientos mediante notas informativas remitidas a través de correo electrónico y publicadas en la Web, igualmente habrá una publicación especial dedicada a recoger las preguntas más frecuentes realizadas por los alcaldes, concejales o funcionarios municipales y la respuesta que desde este Servicio se les ha dado a los mismos.

Cada nota informativa de este tipo recogerá las preguntas nuevas y las formuladas con anterioridad.

En todo caso, en el siguiente enlace pueden descargarse el código electrónico "Crisis sanitaria COVID-19" publicado por el BOE, que se actualiza día a día, y que contiene la principal normativa dictada como consecuencia de esta emergencia sanitaria.

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

¿Pueden celebrarse plenos ordinarios durante el estado de alarma?

Con carácter general, la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de los entes del sector público.

El artículo 3.1 del Código Civil dispone que las normas jurídicas se interpretarán de acuerdo con su contexto, siendo el actual el de una crisis sanitaria, que ha llevado al Gobierno de la Nación a decretar el estado de alarma, en virtud del cual se ha producido una extraordinaria limitación de la libertad de la circulación de las personas.

En este contexto, nuestra interpretación es que no existe obligación de convocar plenos ordinarios mientras duren las limitaciones a la circulación de las personas impuestas por el estado de alarma. Si toda la población ha de quedar confinada en sus casas y los procedimientos judiciales y administrativos se encuentran paralizados, por razones de seguridad sanitaria y para evitar la propagación del virus, no aparece que haya justificación razonable para mantener la convocatoria de sesiones plenarias.

Ha de entenderse, por tanto, que la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos ha de entenderse extendida a la convocar sesiones de plenos u otros órganos colegiados de las entidades locales.

Por otro lado, la convocatoria de un pleno ordinario deviene en un acto imposible, pues no se puede convocar a los concejales con dos días hábiles de antelación, tal y como exige la LRBRL, dado que durante el estado de alarma todos los días son, a efectos administrativos, inhábiles.

No obstante, si hubiera una situación excepcional que así lo requiriera, podría convocarse un pleno, que tendría que tener la naturaleza de extraordinario y urgente. Esta convocatoria extraordinaria podría encontrar amparo en el apartado 4 de la DA 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En cualquier caso, se hace difícil imaginar una situación que sea tan extraordinaria como para excepcionar las estrictas normas de seguridad que previenen del contagio de la COVID-19.

¿Pueden celebrarse plenos o reuniones de otros órganos colegiados telemáticamente?

A este respecto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha publicado una NOTA INFORMATIVA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS REPRESENTATIVOS LOCALES Y DE GOBIERNO (PLENOS, JUNTAS DE GOBIERNO, COMISIONES DE PLENO), ASÍ COMO OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES (COMO JUNTAS DE CONTRATACIÓN) PUEDAN REUNIRSE DE MANERA TELEMÁTICA Y ADOPTAR ACUERDOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA, cuyas conclusiones son las siguientes:

“RESOLUCIÓN

Primera.- Entidades Locales que no han adoptado medidas al respecto y que, no cuentan con previsiones *ad hoc* en su Reglamento Orgánico:

Se adopte, por los Órganos de Gobierno, iniciativa de acuerdo o moción –a consensuar previamente con los Portavoces de los Grupos representados en el Pleno para sometimiento al mismo de propuesta sobre inclusión de modificación, o revisión de previsiones normativas en el Reglamento Orgánico de la Entidad Local–, relativas a aplicaciones destinadas a la preparación de las sesiones de los Órganos colegiados, para el desarrollo de las sesiones, con especial referencia a la posibilidad de voto electrónico (urna electrónica) en caso de no presencia justificada de alguno o algunos integrantes en el lugar de celebración de la sesión del órgano colegiado; aplicaciones para la documentación de los actos de los Órganos colegiados; etc.

Segunda.- Restantes Entidades Locales que sí han adoptado las medidas y que han adaptado sus Reglamentos Orgánicos: Diputaciones de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Ayuntamientos de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jerez.

Recomendación en el sentido de que continúen fomentando, en su ámbito competencial, la implementación y adopción de tales medidas para la preparación de las sesiones de los órganos colegiados; para la elaboración del orden del día; para las citaciones y notificaciones; para la documentación de las mismas; etc.

De los Órganos Colegiados propios y de los de los Municipios, en ejercicio de las competencias que por aplicación de lo establecido en el Art. 36 de la Ley 7/1985, de 2

de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, le pudieran corresponder en cuanto a la cooperación, colaboración y ayuda técnica respecto de los Municipios de menor capacidad económica en la Provincia.

Resolución que se realiza con la intención de mejor preservar el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 de la Constitución (derecho a la participación política en los asuntos públicos) y en forma acorde con los principios de neutralidad tecnológica; adaptabilidad al progreso; accesibilidad; y cooperación entre administraciones públicas; establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos”.

En todo caso, cabe la posibilidad que tanto la comunidad autónoma como el propio Estado dicten una disposición con carácter normativo que lo permita expresamente.

¿Pueden tomar posesión los FHN que obtuvieron plaza en el último concurso y cuyo plazo posesorio acaba en el periodo fijado para el estado de alarma?

El plazo posesorio viene determinado por una norma de rango estatal, la Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

El plazo de toma de posesión de los funcionarios nombrados por la presente Resolución será de tres días hábiles si se trata de puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes, si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en localidad distinta.

La suspensión de plazos posee carácter general, así el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece:

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Cabe, no obstante, una excepción a la suspensión general:

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

Por lo tanto, la duda que se nos plantea es si el Ministerio el órgano competente para acordar esa continuación del procedimiento, o el asunto es de competencia municipal.

Aunque esta cuestión le ha sido planteada al Ministerio, y sin perjuicio de lo que este responda, nuestra opinión es que, dado que la toma de posesión del funcionario es un acto en el que deben confluir tanto la voluntad de quien da posesión, el alcalde, como

de quien toma posesión, el funcionario, y puesto que la conjunción de las voluntades ha de darse en el periodo posesorio taxativamente marcado; entendemos que el levantamiento de la suspensión del plazo corresponde al alcalde, de conformidad con el funcionario, siendo, por lo tanto, aplicable lo previsto en la DA 3ª del RD 463/2020.

Por lo tanto, nuestro criterio es que el plazo está suspendido, salvo que el alcalde del ayuntamiento de destino, motivadamente y de acuerdo con el funcionario afectado, acuerde levantar la suspensión.

¿Quedan suspendidos los plazos de publicación de los presupuestos y ordenanzas municipales durante la vigencia del estado de alarma?

Aquellos ayuntamientos que el día 14 de marzo tuvieran su presupuesto o una ordenanza aprobada inicialmente y en trámite de exposición pública, deberán interrumpir dicho plazo, que se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020 o, en su caso, las prórrogas del mismo.

¿Quedan suspendidos los plazos de cobro en vía voluntaria de los tributos municipales?

Los plazos de cobro, como todos los plazos administrativos, han quedado suspendidos, con las excepciones que el propio Real Decreto que declara el estado de alarma establece.

El Real Decreto 463/2020 estipula en su disposición adicional cuarta que los plazos de prescripción y caducidad de acciones y derechos "quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren".

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos no será de aplicación en cuanto a la afiliación, la liquidación y la cotización a la Seguridad Social, según la modificación introducida por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

¿Quedan suspendidos los contratos de obra o servicios?

Los contratos pueden suspenderse de mutuo acuerdo o unilateralmente por la Administración, en los términos previstos en el art. 208 de la LCSP. Ahora bien, la Administración habrá de indemnizar al contratista en los términos previstos en dicho precepto.

Artículo 208. Suspensión de los contratos.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.

5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

¿Puede un alcalde establecer bonificaciones en los tributos a los autónomos?

El establecimiento de exenciones o bonificaciones tributarias tiene reserva de ley, por lo tanto, solo se podrán establecer las exenciones o bonificaciones que la ley expresamente permita.

No obstante, mediante la oportuna modificación de la ordenanza, se podrán modular las tasas o precios públicos, pero siempre de acuerdo con el principio de capacidad económica, no en función de la actividad profesional del contribuyente-

¿Pueden darse por las entidades locales directamente subvenciones a comerciantes que hayan cerrado sus negocios temporalmente como consecuencia del estado de alarma?

Esta decisión ha de superar un triple filtro: el de la competencia, la concurrencia y la existencia de crédito suficiente y adecuado.

Competencia: en principio las entidades locales tienen competencia en materia de "Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica", art. 9.21 LAULA, pero nos falta el elemento planificador autonómico que permita desarrollarla. Si no se encuentra encaje competencial adecuado, habría que acudir al procedimiento del art. 7.4 de la LRBRL, para el ejercicio de las competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación.

Concurrencia: el otorgamiento de subvenciones directas puede estar justificado por razones económicas o humanitarias (art. 22.1.c LGS), pero siempre que estas razones dificulten la convocatoria pública. Por lo tanto, dado que se trataría de repartir unos fondos limitados entre un número indeterminado de interesados, lo razonable es acudir a una convocatoria pública, una vez finalice el estado de alarma.

Crédito adecuado y suficiente: en todo caso, para comenzar el expediente, será necesario habilitar el crédito adecuado y suficiente que dé cobertura a la pretensión.

Granada a 24 de marzo de 2020

LA DIPUTADA DELEGADA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS

Fdo.: María Ángeles Blanco López